59-D-24

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador Centro, a las trece horas con veinte minutos del día uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Este tribunal recibió una denuncia interpuesta por el señor _____, contra la señora _____ de la Defensoría del Consumidor, con la documentación adjunta (ff. 1 al 13); en la cual se señalan, en síntesis, los siguientes hechos:

El denunciante indica que en la Defensoría del Consumidor interpuso denuncia contra el Banco _____ por restricción y bloqueo de sus tarjetas de crédito; sobre lo cual el banco -según su apreciación- no le proporcionó una respuesta concreta y coherente. Al respecto, manifiesta su inconformidad con la forma de comunicación en su caso, pues indica que fue vía telefónica.

Agrega que en el banco solicitó por escrito copia del contrato de ambas tarjetas y de su cuenta de ahorros para conocer el servicio que se le debía estar prestando y las “ilegalidades” o “incumplimientos” en los que habría incurrido para que tomaran esas medidas; y una explicación sobre el bloqueo y el cargo automático a su cuenta de ahorros por la mora; sin embargo, afirma que no recibió respuesta.

Copia el texto de cruces de correo y respuestas enviadas por la señora _____ y el banco proveedor, por correo electrónico, en diferentes fechas, entre los cuales manifiesta su disconformidad con el seguimiento del caso, pues indica que no ha habido formalmente “aceptación de denuncia” ni resolución a sus peticiones.

Solicita, entre otras cosas, que “se haga una investigación del seguimiento del caso de la señorita _____ de la defensoría del consumidor” (sic).

Al respecto este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. El procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticos regulados en los artículos 5, 6 y 7 de la LEG y sancionar a los responsables de las mismas.

Con este mecanismo se pretende combatir y erradicar todas aquellas prácticas que atentan contra la debida gestión de los asuntos públicos y que pueden constituir actos de corrupción. De esta forma, la labor encomendada a este Tribunal refuerza los compromisos adquiridos por el Estado con la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Dentro de ese marco, el artículo 33 inciso 1º de la LEG establece que una vez recibido el aviso o denuncia si existieren elementos que permitan determinar la posible violación de un deber o prohibición ética, el Tribunal procederá a iniciar la investigación preliminar.

Por otra parte, el artículo 80 letras b) y d) del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental -RLEG establece como causales de improcedencia de la denuncia o aviso que “*el hecho objeto de denuncia o aviso no se perfila como transgresión a los deberes o prohibiciones éticos*”, regulados en los arts. 5, 6 y 7 de la LEG; y que “*el hecho sea de competencia exclusiva de otras instituciones estatales*”.

Por lo que, toda conducta u omisión constitutiva de infracción administrativa debe estar descrita con claridad en una norma, por ende, la facultad sancionadora de esta institución se restringe únicamente a los hechos contrarios a los deberes y prohibiciones éticos regulados por la LEG, ya que la potestad sancionadora de la Administración Pública, es un poder que deriva del ordenamiento jurídico, encontrándose en la ley respectiva la delimitación de su ámbito de competencia.

El principio de *legalidad*, “[...] impone el actuar riguroso de la Administración conforme lo que estipule la ley en cuanto a la creación del catálogo predeterminado, claro y preciso de las infracciones penales y administrativas. Del mismo devienen dos principios que han adquirido una clara autonomía en esta sede, el de *reserva legal* y de *tipicidad*” (Sentencia del 29-IV-2013, Inc. 18-2008, Sala de lo Constitucional). La reserva legal obliga a los regímenes administrativos sancionatorios a que las limitaciones a derechos fundamentales deban realizarse únicamente mediante una ley formal –emanada de la Asamblea Legislativa–; lo que conlleva inevitablemente al respeto de la tipicidad, mediante la cual se configura la conducta regulada en la infracción administrativa, así como la sanción que corresponde a esta. La definición inequívoca de la materia de deber y prohibición es lo que permite a este Tribunal encajar los hechos planteados a una infracción determinada.

II. Del análisis de los hechos objeto de denuncia, se advierte que el señor [redacted] atribuye a la señora [redacted], servidora pública de la Defensoría del Consumidor, no haber dado un “seguimiento formal” a su caso: es decir, cuestiona la legalidad del trámite de su procedimiento o la falta de diligencia en el cumplimiento de funciones de la señora [redacted] ello se concluye, además, del petitorio de su escrito, en el que expresamente pide que “se haga una investigación del seguimiento del caso de la señorita [redacted] de la defensoría del consumidor” (sic).

Al respecto, es preciso acotar que toda autoridad administrativa está supeditada a una serie de principios de rango constitucional, entre los que destaca el de *legalidad* consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución. Como consecuencia de ello, la Administración Pública sólo puede actuar cuando existe una ley formal que la habilite para tal efecto, y dentro de los límites establecidos por la misma.

Así, para que la denuncia *sea procedente ante este Tribunal es imprescindible que el asunto expuesto en la misma sea propio del marco ético establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la LEG*, por lo que al trascender de este límite habrá distintas acciones en otras áreas del ordenamiento jurídico que ya no corresponde conocer a esta autoridad.

En ese sentido, al analizar la relación fáctica en el presente caso, se advierte que la conducta descrita lo que refleja es una aparente irregularidad por aspectos legales del trámite de la denuncia interpuesta por el señor [redacted] en la Defensoría del Consumidor, circunstancia que no se adecúa a ninguno de los deberes y prohibiciones éticos contemplados en los arts. 5, 6 y 7 de la LEG; y, por tanto, no puede ser del conocimiento de este Tribunal.

Efectivamente, la petición del señor [redacted] supondría la verificación relacionada a si el seguimiento del caso en la Defensoría del Consumidor fue conforme a lo

establecido en la normativa aplicable; o si, por el contrario, existieron incumplimientos, irregularidades, ilegalidades o falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones por parte de la señora , lo cual son circunstancias ajenas a la competencia que el legislador ha conferido a este Tribunal.

Y es que la tipificación de conductas y establecimiento de sanciones es creada por el legislador y no por la autoridad administrativa, pues esta última lo que realiza es su aplicación, como manifestación del respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Finalmente, es preciso acotar que la imposibilidad por parte de este Tribunal de controlar las actuaciones de la servidora pública denunciada, no significa una desprotección de los bienes jurídicos que pudieran verse comprometidos sino únicamente que deberán ser otras instancias las que, dentro de sus competencias, evalúen y determinen las responsabilidades que correspondan, pudiendo el denunciante, si así lo estima pertinente, avocarse a las mismas a fin de denunciar lo ocurrido.

De manera que, este Tribunal se encuentra impedido de conocer respecto de los hechos objeto de denuncia antes señalados.

Por tanto, con base en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental, 80 letras b) y d) del Reglamento de dicha ley, este Tribunal **RESUELVE**:

- a) *Declárase* improcedente la denuncia presentada por el señor , por las razones expuestas en el considerando II de la presente resolución.
- b) *Tiénnense* por señalados para oír notificaciones la dirección física y el medio técnico que constan a folio 6 vuelto del presente expediente.

Notifíquese.

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

2

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme al criterio de la 21-20-RA-SCA del 16/11/2020 y lo establecido en el artículo 30 de la LAIP, se extiende la versión pública: